

**RESOLUCIÓN No. SO-193-2022**  
**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 258-2020-SN**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

**VISTO:** Para **RESOLVER** la **APERTURA DEL EXPEDIENTE SANCIONATORIO** para iniciar diligencias de deducción de responsabilidad, por este **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, al Servidor Público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ**, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, por el supuesto incumplimiento de actualización de información en el Portal de Emergencia COVID-19, correspondiente al periodo del diecinueve (19) de abril al treinta y uno (31) de mayo del dos mil veinte (2020), en la segunda revisión del Portal de Emergencia COVID-19; según consta en Expediente Administrativo No. **258-2020-SN**.

**ANTECEDENTES:**

1. En acta de sesión de Pleno **SE-011-2020** de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte (2020) y Acuerdo **SE-014-2020**, el Pleno de Comisionados **ACORDÓ** dar por recibido y aprobado el **INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19**; así mismo, se ordenó la apertura del Expediente Sancionatorio correspondiente a quienes no hayan cumplido con las obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. En el informe presentado por la Gerencia de Verificación de Transparencia (folio 15), se establece que el Servidor Público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ**, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, incumplió lo estipulado en los artículos 4 y 13 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública** y los **lineamientos para publicar información de la emergencia del covid-19 y modo ciudadano para la rendición de cuentas de las Municipalidades**, específicamente en los siguientes apartados: **1.- Compras** en el criterio Completa; **2.- Liquidación Presupuestaria** en el criterio Completa; **3.- Presupuesto Mensual** en el criterio Completa; y **4.- Acuerdos** en el criterio No Cumple; según el informe de verificación correspondiente al periodo del diecinueve (19) de abril al



treinta y uno (31) de mayo del dos mil veinte (2020); en la segunda revisión del Portal de Emergencia COVID-19.

3. En fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante correo electrónico [santabarbaragualala@municipalidad.info](mailto:santabarbaragualala@municipalidad.info) la Secretaría General de este Instituto, envió a la **MUNICIPALIDAD DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, la citación en legal y debida forma al servidor público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ**, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, a efecto de llevar a cabo la Audiencia de Descargo vía ZOOM, programada para el día jueves veintidós (22) de octubre del dos mil veinte (2020) a las once (11) de la mañana.

4. Consta en el expediente aquí atendido (folio 20), Acta de Audiencia, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Abogada Maria Cristina Padilla, en la que se establece y hace contar que el servidor público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ**, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, compareció a la Audiencia de Descargo vía ZOOM programada para el día programada para el día jueves veintidós (22) de octubre del dos mil veinte (2020) a las once (11) de la mañana, quien manifiesta: *“Que ellos estuvieron en una reunión en el Instituto de Acceso a la Información donde nos dijeron que estaban preparando los técnicos y este municipio se quedó sin prepararnos ya que dijeron que no tenían la capacidad de hacerlos todos de un solo, entonces nosotros entramos a la plataforma del instituto hasta el veinticuatro de Abril, por eso fue que quedamos fuera, ese dinero que nos dieron por cuestiones de transparencia lo manejamos con la sociedad civil o sea nos fuimos a cada comunidad y le dimos lo que le correspondía para que ellos hicieran sus compras y entregaran las facturas muchos me dijeron que no debí hacerlo porque quien responde soy yo, pero por transparencia se lo entregue a las personas por eso nos tardamos un poco en entregar las facturas ya la segunda vez no se lo entregamos porque les costó entregar las facturas y hubo un momento delicado acá donde todo estaba cerrado y escases en las bodegas, claro todo eso salió a la luz y dijeron que teníamos 0 por ciento y las personas empezaron a criticarnos diciendo que nos robamos el dinero y yo tuve que salir aclarar a los medios de comunicación que era lo que se había hecho. En estos momentos ya estamos tratando de hacer las cosas, pero aún no tenemos el técnico preparado quien ha estado haciendo este trabajo es la vice alcaldesa ella es la que ha estado informándose por medio de otras personas que nos ayudan para ver cómo se hacen las cosas, ya ahorita nos estamos preparando para entrar en SAMI el próximo año, pero necesitamos de un técnico que*

conozca para no caer en los mismos errores. Nosotros hemos manejado todo con la sociedad civil si hacemos una compra se hacen las cotizaciones y ellos deciden a quien se le hace la compra hemos hecho compras con fondos municipales y con fondos que nos transfieren para la emergencia. Hemos venido informándonos con otras alcaldías sobre como subir la información, el alcalde de Villa Nueva nos ofreció ayudarnos ya que su persona si se capacita los enviaría a mi alcaldía para preparar a mi técnico. Nuestro problema ha sido que no tenemos un técnico especializado que nos ayude a estar subiendo toda la información que se requiere, estamos tratando de subir todo preguntando a otras municipalidades. Hemos venido trabajando con toda la sociedad civil involucrándolos para poder trabajar lo más transparente. Hemos estado viendo la ley después del impase que tuvimos y tratando de conocer toda la información que se requiere para poder actualizar los portales y no volver a cometer los errores”.

5. El día veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), la Secretaria General de este Instituto informa que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, tiene expediente con proceso sancionatorio previo a la Audiencia de Descargo a la que compareció en fecha veintidós (22) de octubre del dos mil veinte (2020), el cual consta en el **Expediente No. 126-2020-SV**, con resolución emitida por el Pleno de Comisionados en la cual se sanciona a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA** con una multa equivalente a **TRES SALARIOS MÍNIMOS**, según **Resolución No. SO-298-2020** de fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil veinte (2020), hechos que genera la incursión de figura de reincidencia por parte del servidor municipal.

6. En fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), la Secretaria General de este Instituto remite las presentes diligencias a la Unidad de Servicios Legales a fin de que emitan el Dictamen legal correspondiente. (folio 21)

7. En fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) la Unidad de Servicios Legales emitió **Dictamen No. USL-185-2021**, en el que dictaminó: **PRIMERO:** Que es procedente declarar **CON LUGAR** las presentes diligencias para deducir responsabilidades, iniciadas oficiosamente por este **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, en virtud *del incumplimiento de los artículos 4 y 13* de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)** en cuanto a la actualización de la información correspondiente a la ejecución de fondos asignados por el COVID-19, en su respectivo Portal de Transparencia, por parte de la **ALCALDÍA**



**MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**  
**SEGUNDO:** Se recomienda la aplicación de una multa que oscile entre **CUATRO (04) A SEIS (06) SALARIOS MÍNIMOS** establecida en el Artículo 28 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, al Servidor Público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ**, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, por la no publicación de la información que de oficio se debe de publicar en el portal de emergencia covid-19, **específicamente en los apartados de compras, liquidación presupuestaria, presupuesto mensual y acuerdos**, así mismo por considerársele reincidente en la vulneración a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al existir expediente con proceso sancionatorio previo, el cual consta en el Exp. 126-2020-SV, con resolución emitida por el Pleno de Comisionados en la cual se sanciona a la supra referida alcaldía con una multa equivalente a tres salarios mínimos, según resolución No. SO-298-2020 de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).

**FUNDAMENTO LEGALES:**

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020) emitió la Resolución No. 1/2020 **PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS** en el apartado de **Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho** en el numeral 33 establece que se debe de asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formato de datos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre el impacto de la pandemia y los gastos realizados en el marco de la emergencia, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones; en tal sentido, la Resolución No. SO-046-2021 de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) fue emitida de conformidad tanto a preceptos legales e internacionales, en vista que dicha resolución esta emitida con la finalidad de asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público, la misma resolución establece que los órganos que garantizan este

derecho y **los sujetos obligados** deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, **así como informar proactivamente**, por lo que podemos determinar que la misma obliga tanto al órgano garante como al sujeto obligado, al no realizar publicaciones no está informando de forma proactiva a la ciudadanía, situación está que desconoce o que obvia la parte recurrente en su escrito de recurso de reposición presentado.

2. El derecho de acceso a la información pública tiene sus bases en la Constitución de la República, que enuncia en sus artículos 72, 74, 75, 76 y, 80, el derecho a la libertad de pensamiento, difusión y petición que posee todo ciudadano hondureño; y si bien es cierto en dichos artículos no se menciona de manera literal el acceso a la información pública como una garantía constitucional y derecho humano, si señala en sus artículos 15 y 16 del capítulo III, que los tratados firmados por Honduras con otros países y organismos internacionales forman parte del derecho interno, así como la obligación de ejecutar las sentencias judiciales de carácter internacional provenientes de dichos tratados, y ya que Honduras es parte de esas convenciones y tratados, implícitamente también reconoce y admite el derecho humano de acceso a la información pública.

3. El **Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)**, mediante Acuerdo SE-004-2020 de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), puso a disposición de la ciudadanía el **PORTAL DE TRANSPARENCIA “EMERGENCIA COVID-19”**; diseñado bajo los estándares nacionales e internacionales para la publicación de información pública, tomando en cuenta la normativa de contratación estatal nacional y formatos datos abiertos, todo con el fin de promover la rendición de cuentas, de todos aquellos fondos planificados y ejecutados en el marco de la emergencia; dicha plataforma establece la información relacionada a la Ejecución Presupuestaria COVID-19 derivada de la crisis sanitaria, que, de manera obligatoria y detallada, deberá publicarse en el portal, información pública alojada y administrada en los servidores del **Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)** y respaldada con la información proporcionada por cada una de las instituciones obligadas.

4. Que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano garantizado por la Constitución de la República, de manera que toda persona tiene derecho a solicitar información y obtener pronta respuesta en el plazo legal, definiendo este derecho la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, como *“el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstos en la presente Ley, en los términos y condiciones de*



*la misma*". Así como también lo es el derecho a petición consagrado en el artículo 80 de nuestra Carta Magna, el cual establece que *"Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal"*.

5. Que, mediante **DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-025-2020** publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de marzo del 2020, se creó la operación **"HONDURAS SOLIDARIA"**, con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarándose el estado de emergencia sanitaria mediante **Decreto Ejecutivo PCM 005-2020** publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero del 2020, reformado por el **Decreto Ejecutivo PCM 016-2020** con fecha de publicación 6 de marzo del 2020.

6. En el artículo 3 numeral 1) y 2) de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, expresa literalmente lo siguiente: "1) **Transparencia:** *El conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información relativa de los actos de las Instituciones Obligadas y el acceso a los ciudadanos a dicha información.* 2) **Publicidad:** *El deber que tienen las Instituciones Públicas de dar a conocer a la población la información relativa a sus funciones, atribuciones, actividades y a la administración de sus recursos.*

7. Que el Código Procesal Civil vigente en su Artículo 3 define el **DEBIDO PROCESO:** Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.

8. Que mediante Decreto Legislativo No. 031-2020, en el artículo 8 se establece la implementación del **TELETRABAJO**, descrito literalmente de la forma siguiente: **"Los empleados de cualquier entidad pública o privada pueden desarrollar sus labores total o parcialmente a distancia de su local de trabajo, .... Los empleados sujetos a este régimen no requieren tener un horario de trabajo, pero deben laborar la cantidad de horas o desarrollar la actividad que negocien con su empleador respetando la cantidad máxima de horas señaladas en la legislación laboral"**.

9. El Pleno de Comisionado del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAP)**, del análisis del expediente de mérito, concluye lo siguiente: Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**; incumplió por segunda vez con la actualización de información en el Portal de Emergencia COVID-19, correspondiente al periodo del diecinueve (19) de abril al treinta y uno (31) de mayo del dos mil veinte (2020); siendo sancionada en la primera revisión con una multa de TRES SALARIOS MÍNIMOS, según Resolución No. SO-298-2020 de fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil veinte (2020); por lo que es procedente declarar **CON LUGAR** la sanción de TRES Y MEDIO DE SALARIO MÍNIMO (3 y ½), equivalentes a **TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 35,077.14)**, al servidor público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ** en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**.

**PORTANTO:**

**EI PLENO DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, en uso de sus facultades y con fundamento en los Artículos: 1, 3, 4, 11 numerales 9) 10) y 11), artículo 3 numeral 1) y 2), 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 12 numeral 7 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Acuerdo SE-004-2020; Decreto Ejecutivo PCM-025-2020; Decreto Ejecutivo PCM 005-2020; Decreto Legislativo 031-2020 artículo 8; artículo 89, 131, 137, 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo; artículo 39 y 13 del Reglamento de Sanciones por Infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 3 del Código Procesal Civil.

**RESUELVE:**

**POR MAYORIA DE VOTOS: PRIMERO:** Declarar **CON LUGAR** las presentes diligencias para deducir responsabilidad, iniciadas oficiosamente por este **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, contra la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**; en virtud de incumplimiento por segunda vez con la actualización de información en el Portal de Emergencia COVID-19, correspondiente al periodo del diecinueve (19) de abril al treinta y uno (31) de mayo del dos mil veinte (2020); siendo sancionada en la primera revisión con una multa de TRES SALARIOS MÍNIMOS, según Resolución No. SO-298-2020 de fecha



veinticinco (25) de noviembre del dos mil veinte (2020). **SEGUNDO:** Que se proceda a sancionar con **TRES Y MEDIO DE SALARIO MÍNIMO (3 y ½)**, correspondientes a la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 35,077.14)** de acuerdo a la tabla de salario mínimo vigente del año dos mil veinte (2020); así mismo, tal como lo establece el artículo 28 de la **LEY DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**; al Servidor Público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ** en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA**, por el **NO** cumplimiento de los Artículos 4 y 13 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, en cuanto a la actualización de la información en el Portal de Emergencia COVID-19, deberá de manera inmediata publicar o actualizar, lo **correspondiente al periodo del diecinueve (19) de abril al treinta y uno (31) de mayo del dos mil veinte (2020).** **TERCERO:** La sanción impuesta mediante esta Resolución se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que corresponda. **CUARTO:** Contra la presente Resolución procede el **RECURSO DE REPOSICIÓN** el cual deberá interponerse ante el Instituto de Acceso a la Información Pública dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de conformidad al artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

**MANDA:**

**PRIMERO:** Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a notificar al Servidor Público **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ** en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.** **SEGUNDO:** Remítase copia de esta al **CONSEJO NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN (CNA)**, de conformidad a lo que establece el Artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 65, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley en referencia. **TERCERO:** Se emite la presente resolución a la fecha por la alta carga de trabajo que se tiene en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y, para los fines legales correspondientes. **NOTIFÍQUESE.**

  
**HERMES OMAR MONCADA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**





  
**IVONNE LIZETH ARDON ANGLINO**  
**COMISIONADA SECRETARIA DE PLANO**



  
**YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ**  
**SECRETARIA GENERAL**



